

Los Criterios de una Política Económica Fracasada*

Dip. Rosa Alblna Garavito Elías

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD en la H. Cámara de Diputados

I

1992 está cerrando con un crecimiento menor al que el Ejecutivo nos propuso hace un año, con tasas de interés 40% más altas en relación a los primeros meses del año; con una caída en el ritmo de la inversión productiva; con una inflación por encima de la esperada por el gobierno; y con una brecha en la balanza de cuenta corriente de casi el doble de la meta planteada. Vale la pena recordar que a partir de 1989 el déficit en cuenta corriente se ha doblado anualmente. ¿En dónde quedó el proyecto de convertirnos en una potencia exportadora?

Los objetivos principales no se alcanzaron y los costos del ajuste se siguen profundizando. Los resultados califican mal la política económica del gobierno, política que no logra estabilidad, solidez y equidad en el crecimiento.

Además del fracaso en los objetivos del crecimiento del PIB (2.7% a diferencia de lo propuesto hace un año [4.0%] y del 5.3% proyectado hace cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo), en cuanto al balance de nuestras relaciones económicas con el exterior medido por el saldo en cuenta corriente, resulta que las importaciones crecieron casi al doble de lo esperado mientras que las exportaciones redujeron su crecimiento a la tercera parte de lo proyectado y que, por lo tanto, el déficit en cuenta corriente será casi el doble de lo propuesto. Hay, sin embargo, un tipo de exportación no registrada en esta cuenta: en el primer semestre del año, por lo menos seis millones de trabajadores mexicanos indocumentados cruzaron la frontera en busca de trabajo en Estados Unidos.



Tanto se elude el problema del déficit comercial —talón de Aquiles de la política económica vigente— que la presentación correspondiente a Balanza de Pagos en el cuadro de Evolución Económica Estimada del documento de Criterios de Política Económica, por primera vez cambia: en lugar del monto en valor absoluto ahora se presenta como porcentaje del PIB, todo para que a primera vista, el lector no se percate de que en lugar de los cerca de 13 mil millones de dólares de déficit tendremos más de 20 mil millones de dólares.

De acuerdo con datos del documento mencionado no se cumplió con las metas de crecimiento de la inversión y la demanda total se redujo como reflejo de la contracción del mercado. Pero aún así, no se reconoce que después de diez años de la misma política económica, el país aún se encuentra en un errático crecimiento en el cual 1992 será de franca desaceleración.

La justicia social es una gran ausente en la política gubernamental. Al respecto nos sorprendimos y preocupamos profundamente por el hecho de que desde la Secretaría de Hacienda, en publicación de agosto de 1992, se reconozca que la población en estado de pobreza extrema es de 24 millones de mexicanos; esto es 7 millones más, 40%, por arriba de los reconocidos en 1988.

No queremos abundar en datos que evidencian que el costo del ajuste sigue recayendo sobre las mayorías, pero el hecho es que la recuperación del salario que el gobierno pregonaba aún no se registra en más del 50% de la población económicamente activa que tiene que vivir con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Ingresos que apenas cubren el 30% de la canasta de bienes

básicos que podían comprar en 1982. A esto se añaden 17 millones de trabajadores de la economía informal con ingresos por debajo del salario mínimo anticonstitucional. En cuanto al empleo, no sólo no se han creado los suficientes para ocupar al millón anual de nuevos demandantes en el mercado de trabajo, sino que el nivel de esta variable se encuentra 15% por debajo del registrado en 1980.

El asunto es grave. Si diez años de política neoliberal no han sido suficientes para un despegue económico sólido y estable y por lo tanto tampoco suficiente y justo, la mayoría de los mexicanos piensa que es hora de cambiar de política. No nos consuela el hecho de que el PIB esté creciendo más rápido que la población, porque esa riqueza se concentra cada día en menos manos. Los trabajadores del campo y de la ciudad, los desempleados, los comerciantes pequeños y medianos no se resignan con la supuesta derrama de beneficios que propone el gobierno. Lo que exigen es un crecimiento suficiente, sólido, sostenido y que la riqueza se reparta con equidad.

Cuando no hay resultados queda el recurso de vender ilusiones. El gobierno se ha caracterizado por ser un buen vendedor de expectativas. Ha vendido bien —sobre todo hacia afuera— la imagen de un país que se moderniza aceleradamente a través de la desregulación, la privatización y la apertura comercial. Pero la venta de esta imagen se agotó, se agotaron sus cartas del cambio estructural. Más desregulación es imposible, la venta de servicios de puertos y aeropuertos son poca cosa comparada con lo que ya se transfirió a los grandes empresarios y una economía más abierta que la nuestra tampoco es factible.

Si no hubo resultados, ¿qué se nos ofrece como novedad en los Criterios de Política Económica para 1993? La reforma económica a nivel microeconómico que permita elevar la productividad de las empresas. Esa es la novedad diez años después, cuando a los mexicanos se nos decía que gracias a la venta de paraestatales, a la desregulación y a la apertura comercial indiscriminada ya éramos más competitivos en beneficio de nuestras exportaciones y en beneficio de nuestros consumidores nacionales; cuando esa imagen se nos vendía; ahora se reconoce que la modernización económica real está aún por verse.

Entendemos que se pretenda que sea esa la novedad de la reforma estructural porque las cartas de la reforma macro se agotaron y porque después de dos años de estira y afloja, finalmente el sector obrero del partido oficial aceptó firmar el Acuerdo para la Elevación de la Calidad y la Productividad. Gracias a este acuerdo firmado por encima de la ley, los empresarios pueden tener cierta certidumbre para continuar violando la Ley Federal del Trabajo (LFT). La reforma estructural a nivel microeconómico propuesta en los Criterios de Política Económica para 1993 no es pues una buena novedad para los trabajadores. Por su parte, los empresarios seguirán exigiendo cambiar a fondo la LFT. La nueva carta del gobierno se mueve pues en terreno pantanoso.

II

Pero a la evidencia del fracaso de la política después de diez largos años de aplicación se responde con la insistencia en la reducción del gasto y en el mantenimiento del superávit financiero. A pesar del incremento del gasto social, éste aún no logra resarcir los daños de su persistente disminución previa. En cuanto a la política de ingresos, la cancelación de la

miscelánea fiscal se maneja como una carta en el juego de la sucesión presidencial. Por su parte, los objetivos de la equidad no aparecen y el terrorismo fiscal continúa aplicándose, ya que se sigue considerando a todo causante como delincuente fiscal hasta que demuestre lo contrario.

En suma, a pesar de que los indicadores nos dicen que los agentes económicos, los ciudadanos de carne y hueso que cada día desde sus distintas esferas contribuyen a la generación de la riqueza nacional, no se comportan como el gobierno espera que lo hagan, el gobierno insiste en el mismo mensaje: alentar la ganancia de los grandes empresarios, financiar el desarrollo con recursos externos, éste es el motor del crecimiento en el que se insiste. ¿Acaso la sociedad son sólo esos grandes empresarios?, ¿y los pequeños y medianos?, ¿y el sector social?

Me quiero detener un poco en el análisis de una de las disparidades entre supuestos gubernamentales y comportamientos reales en 1992: para que las tasas de interés se hubiesen mantenido al nivel inicial del año, era necesario que la demanda de crédito no aumentara y que el flujo de entrada de capitales se mantuviera. Pero resulta que la gente se comportó al revés: a los empresarios se les ocurrió invertir, y a los inversionistas extranjeros y a los repatriadores de capital se les ocurrió disminuir la entrada de capitales, resultado: aumenta la demanda de crédito al mismo tiempo que la oferta de fondos prestables se retrae, de manera que 1992 termina con tasas de interés lesivas al financiamiento de la inversión productiva.

La conclusión de este fenómeno es sencilla: para que los pronósticos elaborados por el gobierno se cumplan, es necesario que los empresarios retraigan su inversión o que

desde el exterior nos lleguen los recursos en el volumen y a los ritmos necesarios. Pensamos que el país merece otra política monetaria y financiera en la cual el financiamiento a la inversión dependa sólo complementariamente del exterior.

Para ello es necesario que las ganancias especulativas acumuladas en la bolsa de valores sirvan efectivamente al financiamiento de la inversión productiva y no continúen alimentando un mayor apetito de ganancia especulativa, apetito que siempre se expresará en aumento de las tasas de interés. Sólo de esta manera los empresarios que apuestan al país —además de apostar legítimamente a su ganancia— podrán encontrar esos fondos prestables para crear y ampliar sus empresas.

Para romper con la disyuntiva que aún amarra a la economía entre estabilidad o crecimiento es necesario llegar a la raíz del problema: generar las condiciones para que la inversión productiva crezca en los niveles y ritmos suficientes para que el crecimiento no sea privativo de unas cuantas y grandes empresas; para que ya no se nos venga a decir que la meta de crecimiento no se alcanzó porque hay empresas que no han llevado a cabo la modernización de sus procesos productivos, en lugar de reconocer que fue justamente en este camino de modernización que tuvieron que quebrar, cerrar o desaparecer.

No podían esperarse otros resultados en cuanto a heterogeneidad en el crecimiento industrial cuando la planeación con los instrumentos de apoyo necesario está ausente de los propósitos del gobierno; cuando el plan de modernización industrial del sexenio repite el estribillo a lo largo de sus 50 cuartillas: lo que las fuerzas del mercado

decidan será positivo para nuestro crecimiento.

Sólo con una oferta productiva en expansión podrá erradicarse la inflación. Y ésta es posible mediante un pacto productivo concertado entre todos los sectores de manera democrática y representativa, en donde con equidad se repartan los costos de una efectiva modernización económica y no como hasta ahora, en detrimento del ingreso de los trabajadores y del mercado interno.

Se logrará con una política fiscal que mediante la descentralización efectiva fortalezca al municipio libre, se promueva el desarrollo regional y se propongan metas de equidad en la distribución del ingreso a través, entre otras medidas, de la desgravación fiscal para los trabajadores que perciban hasta cinco salarios mínimos. Con una política social en donde los recursos del gasto social puedan efectivamente ser controlados y vigilados por la sociedad. Con un modelo de economía mixta en donde los sectores público, privado y social participen de manera corresponsable bajo reglas claras del juego y con una reglamentación adecuada del artículo 25 constitucional y del sistema nacional de planeación.

III

La ideología y la política neoliberal sufrieron un duro revés con la derrota de Bush. El camino del neoliberalismo se agota, es hora de rectificar la política económica, otros países empiezan a hacerlo. Es necesario que los ciudadanos elijan libremente a quien los gobierna y con ello todos los sectores sociales y productivos puedan tener ingerencia en las decisiones de política económica.

* Texto elaborado por la autora, a partir de su intervención en la comparecencia del secretario de Hacienda ante la Cámara de Diputados el 17 de noviembre de 1992.